

Agosto 4 de 1939

27ª REUNION — 25ª SESION ORDINARIA

Presidencia del señor Juan G. Kaiser

MINISTRO PRESENTE:

de Agricultura,
Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguar, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Agulla, Juan Carlos
Alsina, Juan José
Allperin, Samuel
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Arbeletche, Anibal P.
Astesiano, Carmelo I.
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Boatti, Ernesto C.
Boero, Albino
Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carús, Agustín J.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Damonte Taborda, Raúl
De Miguel, Benito
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos
Fazio Rojas, Lorenzo
Figuerola, Julio A.

Garona, Juan A.
Ghioldi, Américo
Godoy, Raúl
Gómez Grandoli, Clemente
Gómez Eincó, Abel
González, Benjamín S.
Grassi, Alfredo
Grisolia, Luis
Güerci, José María
Guerrero, José Rafael
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Víctor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Horne, Bernadino
Illanes, Eloy J.
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Izurieta Fourquet, Agustín
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Lanús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lecica Alvear, Florencio
López, Héctor S.
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Martínez, F. Benigno
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Mugica, Adolfo
Muniagurria, Walter Julio
Noel, Martín

Onsari, Fabián
O'Reilly, Guillermo R.
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osorio Scler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Peña, Solano
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Pizarro, Néstor A.
Prat Gay, Fernando de
Quintana, Fenelón
Radio, Pedro
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Sacccone, Romeo D.
Sáenz, Mario
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Schoo Lastra, Dionisio
Simón Padrós, J.
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Solis, Rogelio J.
Susan, José C.
Tamborini, José P.

Tapia, Numa
Teisairé, Eduardo (h.)
Vásquez, Juan Carlos
Vélez, Francisco M.
Vilgré La Madrid, Juan
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Alvarez Colodrero, Carlos
Barrau, José
Barriónuevo, Gerardo
Biancofiore, Rafael
Cabral, Humberto
Cordero, Octavio
Cousel, Carlos D.
Devoto Acosta, Alcibíades
Duffy, Eduardo N.
Eberlé, Enrique
Ferreira, Antenor R.
Hernández, Victorio
Martínez, Gregorio N.
Morrogh Bernard, Juan F.
Noel, Carlos M.
Sánchez, Adolfo B.
Soto, Pedro Numa
Urien, Enrique César
Vilchez, Martín

AUSENTES, SIN AVISO:

Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Arias Uriburu, Juan
Barceló, Alberto
Castro Frediani, Manuel L.
Lima, Vicente Solano
Martínez, Manuel
Paz Posse, Ramón D.
Soldano, Arquímides A. E.
Videla Dorna, Daniel

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que se da cuenta de la situación planteada con motivo del cumplimiento de la ley

número 11.623; que dispone la construcción de la avenida Belgrano, en la ciudad de Rosario.

II.—Comunicación del Honorable Senado.

III.—Peticiones particulares.

IV.—Proyecto de ley, del señor diputado Figuerola, sobre construcción de un hospital sanatorio en la provincia de Catamarca.

- V.—Proyecto de ley, del señor diputado Fazio Rojas y otros, autorizando al Poder Ejecutivo a invertir una suma de dinero en la celebración del V Congreso Panamericano de la Tuberculosis.
- VI.—Proyecto de ley, del señor diputado Gómez Grandoli y otros, acordando pensión a la señora María Rita Montenegro de Marcillo Suárez y señoritas Beatriz y May Betty Marcillo.
- VII.—Proyecto de ley, del señor diputado Martínez (F. Benigno), acordando pensión a la señora Juana Solari Cazaux de Castillo Odena.
- VIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Martínez (F. Benigno), acordando pensión a la señorita Isabel Macaulay Macfarquhar.
- IX.—Proyecto de ley, del señor diputado Hernández (C.) y otros, acordando pensión a la señorita Julia Elena Zatazar.
- X.—Proyecto de ley, del señor diputado López y otros, creando una escuela práctica de fruticultura y transformación industrial en Coronda (Santa Fe).
- XI.—Proyecto de ley, del señor diputado Solari (J. A.), sobre ley orgánica de los ministerios nacionales.
- XII.—Proyecto de ley, del señor diputado Urien y otros, creando el Instituto de clínica psiquiátrica, dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
- XIII.—Proyecto de ley, del señor diputado De Miguel, acordando una subvención mensual a la Asociación de Siervas de San José, de General Viamonte (Buenos Aires).
- XIV.—Proyecto de ley, del señor diputado Ortiz de Zárate, acordando pensión a la señora Herminia Campi de Velazco.
- XV.—Proyecto de ley, del señor diputado Ortiz de Zárate, sobre pensión a la señora Beatriz Ferreyra de Igartua.
- XVI.—Proyecto de ley, del señor diputado Basualdo, creando una escuela profesional y de industrias domésticas para mujeres, en la provincia de San Juan.
- 4.—Nómina de proyectos de resolución y de declaración.
- 5.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados Martínez (G. N.) y Courel.
- 6.—Moción del señor diputado Pastor, para que se postergue la consideración de las minutas y se pase a considerar de inmediato el despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del consejo agrario nacional. Es aprobada.

- 7.—Moción del señor diputado Cooke, para que se considere sobre tablas el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre subsidio a la Asociación del Profesorado.
- 8.—Se considera y aprueba el asunto a que se refiere el número anterior.
- 9.—Moción del señor diputado Montagna, solicitando se acuerde permiso para ausentarse de la Capital, a los integrantes de la Comisión Parlamentaria encargada de estudiar los proyectos sobre vivienda popular. Es rechazada.
- 10.—Indicaciones: de los señores diputados Solari (J. A.) y Onsari, relacionadas con dos pedidos de informes; y del señor diputado Guglielmelli, sobre inserción de una nota en el Diario de Sesiones.
- 11.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del consejo nacional de colonización. Es aprobado en general.

—En Buenos Aires, a cuatro días del mes de agosto del año 1939, siendo la hora 15 y 29:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Eyto. — Hago indicación de que se espere un cuarto de hora más, en el caso de que para la hora reglamentaria no hubiera número en el recinto.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando.

2

ACTA

—A la hora 15 y 40:

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con 85 señores diputados en el recinto. Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Quintana, se suprime la lectura, y se da por aprobada.

4

NOMINA DE PROYECTOS DE RESOLUCION Y DE DECLARACION

Sr. Secretario (González Bonorino). — Se han presentado los siguientes proyectos de resolución:

Del señor diputado Pastor, fijando días para considerar los proyectos de declaración y pedidos de informes.

Del señor diputado Illanes por el que se piden informes al Poder Ejecutivo sobre accidentes producidos en la antigua línea del Ferrocarril Central Córdoba.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a dar cuenta de los pedidos de licencia.

5

LICENCIAS

1

Buenos Aires, agosto 4 de 1939.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Juan G. Kaiser.

S/D.

Encontrándome enfermo, solicito al señor presidente y por su intermedio a la Honorable Cámara, licencia para faltar a las sesiones de la corriente y próxima semana. Salúdale atentamente.

Gregorio N. Martínez.

—Sin observación, se vota y concede, con goce de dieta, la licencia solicitada.

2

Buenos Aires, agosto 3 de 1939.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Juan G. Kaiser.

S/D.

Por encontrarme enfermo, solicito, por intermedio del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, permiso para faltar a tres sesiones.

Saludo al señor presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos D. Courel.

—Sin observación, se vota y concede, con goce de dieta, la licencia solicitada.

6

MOCION

Sr. Pastor. — Pido la palabra.

En la sesión de ayer la Honorable Cámara discutió dos minutas de las que habían sido presentadas. Una de ellas no alcanzó a votarse por falta de quórum, después de varias horas de sesión. Ese hecho corrobora manifestaciones que hice en sesiones anteriores, y el diario «La Nación», de cuya seriedad nadie puede sospechar, destaca el terreno peligroso en que se coloca la Cámara si sigue invirtiendo su tiempo en tratar minutas en vez de legislar como interesa al país.

No deseo abundar en consideraciones, pues ya se ha hecho evidente la necesidad de que el Parlamento reaccione y vuelva por su prestigio, legislando.

IIago, pues, indicación de que de inmediato entremos a considerar el despacho sobre el proyecto de colonización, hasta concluir con él, excluyendo todo otro asunto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Está en consideración la proposición del señor diputado por San Luis.

Sr. Tamborini. — Pido la palabra.

Entendemos que la manera más eficaz de que la Cámara trabaje es respetando sus propias resoluciones.

No puede ocultarse, por otra parte, que la moción que formula el señor diputado tiende a evitar que se consideren las minutas, cuyo número se estima excesivo, y que podrían ocupar, por tanto, toda la sesión de hoy. Pero respecto a este punto tan discutido, de los proyectos de minutas, existe un proyecto de resolución presentado por el propio señor diputado, que oportunamente lo considerará la Cámara y sospecho que será sancionado.

Por esos motivos votaremos en contra de la moción formulada.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la proposición del señor diputado por San Luis, de que se entre a considerar de inmediato el proyecto de ley sobre colonización, aplazando los proyectos de resolución presentados.

—Resulta afirmativa de 49 votos, sobre 96 señores diputados.

Sr. Cooke. — Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a reeditar la votación.

—Rectificada, resulta igualmente afirmativa de 50 votos, sobre 96.

7

MOCION

Sr. Cooke. — Pido la palabra.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha despachado un proyecto que presenté en las primeras sesiones del mes de julio, que también estaba subscripto por los señores diputados Güiraldes, Fassi y Anastasi. Se refiere a un subsidio de \$ 5.000 m/n., para que la Asociación del Profesorado pueda enviar un delegado a la constitución del Comité Permanente de Enseñanza Superior, que se realizará en París durante el mes de octubre.

Si este asunto debiera esperar su inclusión en un plan de trabajo, el delegado de la Asociación del Profesorado no podría concurrir a la constitución del mencionado comité. Por otra parte, la forma en que el asunto ha sido despachado hace presumir que su sanción no presentará dificultades, por lo que pido sea tratado sobre tablas. Me refiero al despacho que figura en la orden del día número 171.

Sr. Presidente (Kaiser). — Está en consideración la moción de sobre tablas que formula el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pastor. — Las palabras que ha pronunciado el señor diputado para fundar la moción, son suficientes para que votemos el asunto, sin debate.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la moción de sobre tablas.

—Se vota, y resulta afirmativa.

8

SUBSIDIO A LA ASOCIACION DEL PROFESORADO

(Orden del día número 171.)

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el proyecto de ley del señor diputado Cooke y otros señores diputados, acordando una suma de dinero a la Asociación del Profesorado, para gastos de la delegación del profesorado argentino a la consti-

tución del Comité Permanente de Enseñanza Superior; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 20 de julio de 1939.

Raúl Godoy. — Arquímides A. E. Soldano. — José Aguirre Cámara. — José Guillermo Bertotto. — Raúl Díaz. — Lorenzo Fazio Rojas. — Abel Gómez Rincón. — Benjamín S. González. — Ismael López Merino. — Carlos A. Pita

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Acuérdase a la Asociación del Profesorado la suma de \$ 5.000 m/n., para gastos de la delegación del profesorado argentino a la constitución del Comité Permanente de Enseñanza Superior, que tendrá lugar en París durante el próximo mes de octubre.

Art. 2º — Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se imputarán a rentas generales.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Juan I. Cooke. — Carlos Güiraldes (h.). — Santiago Carlos Fassi. — Leonidas Anastasi.

Sr. Presidente (Kaiser). — Está en consideración.

—Sin observación, se vota y aprueba en general y en particular.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda sancionado. Se comunicará al Honorable Senado.

9

MOCION

Sr. Montagna. — Pido la palabra.

La Comisión Parlamentaria encargada del estudio de los proyectos sobre vivienda popular, ha resuelto realizar un corto viaje por las provincias del Este, del Norte y territorios nacionales, para el desempeño de su cometido. Con ese motivo los diputados que constituyen la comisión me han encomendado solicitar a la Honorable Cámara permiso para ausentarse por

11

COLONIZACION NACIONAL

—El despacho figura en la página 1088 del Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Osorio. — ¿Se va a entrar a la consideración del proyecto de ley de colonización?

Sr. Presidente (Kaiser). — Sí, señor diputado; orden del día número 73.

Sr. Osorio. — Sin perjuicio de que la Cámara trate desde ya el asunto, hago indicación para que se avise al señor ministro de Agricultura, a fin de que pueda concurrir.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se le hará saber.

Sr. Pizarro. — La orden del día número 73, que trata la creación del consejo agrario nacional, al ser estudiada ofrece algunas dificultades, unas de orden constitucional, otras de carácter estrictamente jurídico y otras de naturaleza económica.

La ley tiene la doble finalidad de crear un consejo agrario nacional y de fomentar la colonización.

Por el texto constitucional que acuerda al Congreso facultades perfectamente regladas en el artículo 67, inciso 16 se dispone que es atribución del Congreso proveer lo conducente a la inmigración, a la colonización de la tierra de propiedad nacional; pero deja en el artículo 107 de la misma Constitución, entre las facultades privativas y no delegadas de los gobiernos de provincia, el régimen de la inmigración y de la colonización de la tierra de orden provincial. Dice así el texto constitucional: «Promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial», etcétera.

Por el artículo 3º de la misma Constitución, que ha provocado algunos proyectos de los señores legisladores, se establece la forma de federalizar en las provincias los territorios provinciales, requiriéndose para ello la autorización expresa de las legislaturas locales.

No obstante, ha habido leyes sancionadas por el Congreso estableciendo el régimen de colonización en los territorios de las provincias sin algunos de estos requisitos. Pero en esta oportunidad creo que es necesario recordar que no podemos crear estrictamente un consejo agrario

nacional con jurisdicción, como dice más adelante, en toda la Nación, sin entrar desde ya a violar el texto expreso de la Constitución a que he aludido.

No es una forma regular ni normal del Congreso sancionar leyes de esta índole. Lo primero que debemos considerar es, cuáles son las facultades del cuerpo para dictar la ley; cuáles son los límites dentro de los cuales esa facultad puede obrar y no excederse, porque de lo contrario producimos un acto que el día de mañana podrá ser tachado de inconstitucional. Esto en cuanto al aspecto estrictamente de fondo.

En lo que se refiere al criterio teleológico o a la finalidad que persigue la ley, no está ella estrictamente de acuerdo con las iniciativas parlamentarias de los últimos tiempos.

Si observamos detenidamente podemos comprobar que casi todas las actividades de la producción y de la riqueza del país, por no decir todas, están subsidiadas. La forma de intervención del Estado ha sido por vía de protección y así en la yerba mate del Norte, en el algodón, en el azúcar, en el vino, en el trigo, el año pasado en igualdad de condiciones; la ganadería lo mismo. No veo la razón de ser de esta nueva ley determinando un mayor aumento en la producción y trayendo una alteración en el régimen jurídico de la propiedad y en el régimen legal de las expropiaciones, en una situación perfectamente inconstitucional, para que la Cámara entre a sancionar en general y a prestar su aprobación a un proyecto que adolece de graves defectos.

Si nosotros observamos esta misma ley de colonización, nos encontramos con otro factor: el relativo a su financiación, con recursos y medios que no han sido valorados oportunamente por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, no obstante que significa una erogación cuantiosa para el presupuesto de la Nación, para este año y que en los años ulteriores ha de ir en aumento.

Entro ahora a considerar los dos aspectos fundamentales: la creación del consejo agrario nacional y el fomento de la colonización.

Respecto del primero, diré que el consejo agrario nacional tal como se lo proyecta, es una nueva creación burocrática de la ley, cuyas finalidades ulteriormente podrán ser benéficas —no entro a discutir las hipótesis sobre el futuro— pero que en el presente significan un nuevo cargo para el erario nacional. En principio soy enemigo decidido de estas formas autárquicas en que se va desmembrando por

momentos el presupuesto y gobierno de la Nación, de tal modo que las reparticiones de ese género hoy insumen casi un tercio del presupuesto, lo que hace subir enormemente el monto sin tener el contralor directo que corresponde al Congreso en la creación de los puestos y sin tener el Poder Ejecutivo la facultad inmediata y directa que por la Constitución le corresponde, de nombrar y remover a los empleados, sino por la vía de la delegación de facultades y el acuerdo con el Senado. En este sentido, también, estoy en contra de la creación de este consejo.

Se establece, además, un régimen de carácter vitalicio para los miembros que se designen en ese consejo. Volvemos a la forma netamente monárquica de la organización de los oficios y de los empleos. Yo entiendo que la administración debe tener un carácter de estabilidad, por la eficiencia de los funcionarios que la componen, pero no podemos darle nosotros ese carácter de permanencia y estabilidad, y aun vitalicio, sobre disposiciones expresas de la Constitución de la Nación.

Si este consejo agrario todavía tratase de actuar en el interior de la República, lo toleraría; pero es una nueva creación burocrática que se establecerá en la Capital Federal.

En materia de colonización las situaciones son perfectamente claras en cuanto al fomento de ella. Ya se ha dicho y repetido casi hasta la saciedad, que hay un factor humano sin el cual no se puede colonizar, y hay, además, el factor tierra, que es indispensable considerar para saber qué es lo que se va a colonizar, y yo me pregunto dónde se va a llevar esta forma de colonización. ¿A los territorios ya colonizados, a la zona que ya goza del beneficio de la colonización en una forma imperfecta si se quiere, pero que se perfeccionará luego con la lógica evolución de las necesidades económicas, o se trata de llevar la colonización a las zonas no colonizadas? Si así fuera, todavía tendría una justificación la ley. Si se tratara de llevar la colonización con lo que importa en cuanto a creación de riqueza, la distribución de población, a las zonas no colonizadas, todavía admitiría la existencia de esta ley; pero no es así. La ley de colonización es exclusivamente para lo ya colonizado, es exclusivamente para las zonas comprendidas dentro de lo que podría llamar el bloque «litoralense» ampliamente colonizado, con un exceso de producción y sin mercado donde colocar esos productos, que es lo que interesa hoy.

Lo que la ley no contempla son las necesidades reales del interior de la República; no considera la necesidad de que la población de la ciudad concurre a la campaña, sino que trata de contemplar tan sólo un problema que ya las leyes naturales de la economía y del derecho civil lo resuelven.

Si vamos a colonizar, debemos analizar dos clases de factores: la colonización que se realiza por factores extraños al país y la colonización que se realiza con elementos propios del territorio de la República. En este aspecto, la ley de colonización acuerda un tanto por ciento a ese fin. Pero yo creo que es indispensable insistir en que la colonización verdadera consiste en adaptar y educar al nativo, para que sea él quien colonice con preferencia al inmigrante u otro poblador del territorio. No es que con ello me oponga a la buena inmigración, que hay que fomentar siempre; pero así como Alberdi dijo: «Gobernar es poblar», Alberdi se encargó de aclarar el concepto de lo que era la población, y cuando en la *Peregrinación de la luz del día* él nos relata su viaje por el territorio de América, dice en el capítulo XV, que la inmigración tiene dos aspectos fundamentales: que gobernar puede ser poblar y que poblar puede, a su vez, ser gobernar, siempre que la población que se lleve al territorio sea una población honesta, laboriosa y capaz; pero que poblar puede ser reservas materiales y morales del país, cuando la inmigración que se lleva a esos territorios, en vez de ser la que corresponde por su naturaleza, por sus condiciones de trabajo, de esfuerzo y de producción, sea recolectada en los bajos fondos europeos o no sea debidamente seleccionada en el territorio de la República.

Pero el mismo Alberdi, en ese capítulo que sería imprescindible reproducir textualmente para que la opinión pública se forme un juicio sobre Alberdi a través del mismo Alberdi y no por la expresión de terceras personas, nos dice que no basta llevar la inmigración a las zonas ya colonizadas y pobladas, porque con ello no gana absolutamente nada el país, sino que es imprescindible llevarla a las zonas donde no existe, donde la riqueza económica no se ha creado, a fin de crear fuentes de producción y de consumo.

Sosteniendo esa teoría, considero, que si la ley de creación del consejo agrario nacional va a reducirse a colonizar lo colonizado, sería un nuevo y craso error que se cometería en la política de colonización.

Noto, también, otros problemas que han agitado y agitan grandemente a los países agrícolas de Europa. Por ejemplo, el 14 ó 16 de febrero de este año, el Parlamento francés trató en 53 interpelaciones hechas al ministro de Agricultura, con relación a la situación agrícola de Francia, el problema del éxodo y los problemas correlativos de los campesinos o del abandono de la campaña. Yo me pregunto por qué causas el colono abandona, como lo ha hecho en nuestro territorio de La Pampa, las tierras que en otro tiempo producían. Debe ser por una de estas dos causas: o porque la tierra y las condiciones climatéricas no permiten hoy la producción de antes, o porque el costo de la producción es superior a la producción misma de la tierra y siendo eso así, lo que primero debemos cuidar es el costo de producción y asegurar una justa remuneración al colono, y segundo, hacer que la unión de la persona con la tierra sea un lazo natural de permanencia que asegure la continuidad de un núcleo familiar en un territorio dado.

De manera que no hay que llevar la colonización a la zona ya poblada, sino afianzarla en la zona donde las inclemencias de la naturaleza tienden a que emigre, para que entonces por los medios técnicos o científicos necesarios se defienda la riqueza de esa zona o se cree la necesaria para el progreso.

El factor tierra, que es el segundo factor que hay que tratar en la colonización y es el que se ha pretendido distinguir indebidamente entre lo agrario y lo agrícola; el factor tierra no crea, en materia agraria, una propiedad especializada.

El problema agrario influye, gravita, directamente en el concepto de la propiedad civil de todos los países del mundo. Ya se ha dicho en esta Cámara y con abundancia de datos, que la lucha de los que tienen tierras con los que no la tienen, viene de muy antiguo. Si queremos ver el concepto de la propiedad en Roma y saber cómo ha nacido ese derecho, no necesitamos sino ir a ver las luchas entre los patricios y los plebeyos, las agitaciones sociales por las leyes agrarias de los Gracos, sus revoluciones y sus sacudimientos intestinos, y el texto mismo de las leyes. Entonces este derecho de propiedad no nació como una concepción absoluta del legislador sino como una resultante del ambiente económico, cultural, político y social del pueblo.

Nuestra Constitución también ha sostenido lo mismo que el derecho antiguo en Roma, sobre el concepto de la propiedad. Y no se diga que es un criterio individualista, y que se tiene de la propiedad hoy un concepto de función social que antes no existía. En Roma también se tenía del derecho de propiedad un concepto de función social. Y cuando Justiniano hacía enseñar, desde las Institutas, el derecho romano y el derecho de sus antepasados, a los jóvenes de las universidades y de las escuelas, les decía en el Libro Primero, que la república tiene especial interés en que cada uno use de sus bienes en la mejor forma para el bienestar general, porque el bienestar de todos dependía del uso benéfico y honesto que cada uno de ellos hiciese de sus bienes.

El concepto del abuso de la propiedad, traído incidentalmente, no es un concepto romano sino que lo es de la glosa, posterior. Cuando Ulpiano habla del abuso, no se refiere a un abuso del derecho sino a las cosas que se consumen por el uso. Si seguimos el mismo estudio de la propiedad en el derecho francés, vemos que no es una propiedad agraria diferenciada, ya lo analicemos en la época gala, romana, feudal, en la época de la monarquía absoluta, en la época revolucionaria y en la de codificación. ¿Y por qué causas? Por una razón muy sencilla. Correlativo al derecho escrito romano, en que la propiedad era individualizada, aparece el derecho bárbaro consuetudinario, en que la propiedad era colectiva. Pero como el señorío feudal fué poco a poco absorbiendo las propiedades individuales a trueque de las garantías que les daba, aparece entonces ensamblada la propiedad del señor con la del propietario libre, aparecen confundidas y casi mezclada a la propiedad alodial.

Producida la monarquía absoluta, desaparece la propiedad feudal y entra entonces la propiedad real. Cuando vino la Revolución Francesa, Taine lo dice con toda propiedad y crudeza, en la *Revolución*, capítulo III: es la lucha de los pobres, de los que no tienen, contra los ricos; vale decir la propiedad en manos de unos obliga al Estado a reconocer el derecho de propiedad absoluto, inviolable y de carácter individual, sin censos ni servidumbres de ninguna naturaleza.

Nuestra Constitución, inspirada también en la legislación española, en las leyes de Indias y en el código francés, trató estos problemas, y acuerda en su artículo 17 el derecho de propiedad absoluta e inviolable a favor del titular del derecho. Este derecho del propietario

cede por la legislación civil ante el interés colectivo cede en las relaciones de vecindad, y cede totalmente en los casos de expropiación por utilidad pública. Pero la utilidad pública y la necesidad pública, como vamos a verlo más adelante, no son creaciones arbitrarias, son casos de excepción, en los cuales únicamente el legislador puede establecer la utilidad pública sin delegar sus funciones en otro poder porque ello sería, por otra parte, inconstitucional.

No es ése solamente el concepto de las legislaciones anteriores. Los códigos modernos, la legislación actual alemana en los artículos 903 y 905 limitan el derecho de propiedad exclusivamente en cuanto tenga interés para su uso; pero respeta todos los otros caracteres y los atributos esenciales del derecho. El código del Brasil en los artículos 524 y 526 sostiene lo mismo. El código suizo en el artículo 641 y correlativos sostiene la misma tesis: limita el derecho de los propietarios en cuanto tenga intereses. Pero todas las condiciones esenciales, sus derechos, sus caracteres existen en todas las legislaciones.

¿Cuándo aparece la perturbación de este carácter en materia de propiedad agraria? Para mí, después de la guerra europea. Las primeras legislaciones que a ese respecto se presentan, más que con caracteres de régimen total y permanente de propiedad, con caracteres de secuestro de la propiedad, de apropiación indebida, aparecen en la ley de Checoslovaquia, de 1921. Esa ley en su artículo 9º, creo, establece que todas las propiedades que hubiesen pertenecido a la nobleza, a los Habsburgos, a los enemigos políticos o de la guerra, podrán ser retenidas inmediatamente por el poder político y destinarlas a la agricultura.

Y con este espíritu de legislación circunstancial, diré casi agresivo, se constituye la pequeña propiedad, la subdivisión en Checoslovaquia, espíritu por cierto muy distinto del netamente conservador que anima la subdivisión de la tierra en Francia, donde el fuerte conservador reside en el campesinato, que ha llegado a la subdivisión de la tierra no por leyes sino por la evolución y por el libre juego de la economía de ese país.

Por eso, la creación de estos institutos autárquicos no benefician, sino que perturban, el régimen de la propiedad; perturban el orden social, porque tampoco conducen a nada. Y en la interpelación a que me he referido del gobierno francés, producida en febrero de este año, decía uno de los oradores: es imprescindible que el

Estado vuelva a su oficio, que anule todas las oficinas del trigo, todo el contralor de la organización de la producción y de la tierra, y que deje el libre juego de ellas al productor y al propietario, es decir, a los sindicatos que están allí perfectamente organizados, porque el lazo que une al hombre con la tierra es un lazo de carácter natural y no un lazo de carácter proletario, ni burgués, ni oficial.

La opinión que sensatamente debemos seguir no es, por tanto, copiar ni imitar las legislaciones circunstanciales de otros países, ni crear organismos que en otra parte los mismos precursores hoy los rechazan, sino tratar por medios naturales, por el libre juego de la concurrencia, de restablecer el equilibrio y las normas necesarias para convivencia social en el orden agrario y en el orden de la producción.

Es también un error pensar que el latifundio se puede dividir por vía impositiva. Es casi una puerilidad y diré por qué.

Las leyes fiscales sólo se refieren a la forma de la imposición y a las contribuciones que el propietario y el tenedor de la riqueza deben hacer al erario de un Estado para subvenir a sus necesidades; pero lo que se le pida al contribuyente no puede ir más allá de las necesidades de ese Estado.

Sr. Aguirre Cámara. — El señor diputado está, entonces, en contra de la orientación del gobierno de Córdoba.

Sr. Pizarro. — Esperaba la observación del señor diputado.

Sr. Aguirre Cámara. — Era lógico que la esperara.

Sr. Pizarro. — No se trata de establecer una disparidad de criterio con una legislación provincial. Se trata de afirmar principios de carácter institucional, que para mí son superiores...

Sr. Aguirre Cámara. — Se tratará de afirmar principios o lo que fuera...

Sr. Hernández (C.). — La observación está fuera de lugar.

Sr. Aguirre Cámara. — Pero ha sido tan neta la manifestación del señor diputado y está en tan abierta pugna con las orientaciones señaladas por el gobierno de Córdoba...

Sr. Pizarro. — ¿De manera que el señor diputado va a llegar a la misma conclusión que yo: que el proyecto es malo y hay que volverlo a comisión?

Sr. Aguirre Cámara. — La conclusión a que llego es que el señor diputado está sosteniendo

criterios que están en contradicción por los expuestos por el gobierno radical de Córdoba.

Sr. Pizarro. — Si la ley es mala, hay que volverla a comisión.

Sr. Palacio. — La observación del señor diputado Aguirre Cámara es perfectamente exacta.

Sr. Pizarro. — Si encuentra razonable lo que digo, quiero que encuentre razonable la conclusión a que llego: que el despacho de la comisión es malo.

Sr. Palacio. — Sigue eludiendo la interrogación que se le ha hecho.

Sr. Aguirre Cámara. — Yo le observo al señor diputado Pizarro, que lo que sostiene en este momento está en abierta pugna con lo que ha expresado el gobernador de Córdoba en documentos dirigidos a la Legislatura y con lo que establecen leyes que ha sancionado su legislatura adieta. Ello no significa que yo esté de acuerdo con el señor diputado, ni en que la ley sea mala. Lo que le digo al señor diputado es que está en abierta pugna con el gobierno del doctor Sabattini en Córdoba.

Sr. Pizarro. — Son conclusiones demasiado extremas.

Sr. Aguirre Cámara. — Lo mío es lo lógico. Lo del señor diputado es un poco teológico. *(Risas.)*

Sr. Pizarro. — ¡Lógico!

Sr. Hernández (C.). — Sobre todo, la observación está fuera de lugar porque no se está discutiendo en este caso ninguna legislación provincial.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia le recuerda al señor diputado que tiene el tiempo limitado.

Sr. Pizarro. — Si se me descuenta el tiempo, no tengo inconveniente en aceptar las interrupciones.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia no podría hacerlo.

Sr. Pizarro. — Yo entiendo que los poderes del Estado no son ilimitados en ningún sentido, porque si hubiera un poder del Estado absolutamente ilimitado, tendría la suma del poder público en ese orden de ideas, ya sea en materia de imposición, ya sea en materia de organismos de la índole del que nos ocupa, que están en contra del texto expreso de la Constitución.

Sr. Repetto. — ¿Propondrá la intervención a Córdoba, en ese caso?

Sr. Pizarro. — Propóngala el señor diputado, y vamos a tratarla.

Sr. Repetto. — El señor diputado está combatiendo la mejor tradición impositiva de la

provincia de Córdoba, que no fué fijada por el gobierno actual, sino por otros anteriores.

Sr. Pizarro. — A juicio del señor diputado.

Sr. Aguirre Cámara. — Tiene razón el señor diputado por la Capital: esa política tiene una larga tradición en Córdoba y se ha exteriorizado con el régimen de la tierra...

Sr. Dickmann. — Los conceptos del señor diputado están en contra de las ideas básicas de la Unión Cívica Radical. *(Risas.)*

Sr. Pizarro. — Ya vamos a llegar a eso.

En materia económica, a diferencia de la materia teológica a que se refiere el señor diputado Aguirre Cámara, yo soy partidario del libre examen, vale decir de la libre interpretación en esta materia, y lo voy a demostrar...

Sr. Aguirre Cámara. — Es protestante el señor diputado.

Sr. Pizarro. — En esta materia, posiblemente,

Nosotros no podemos aplicar a un país como el nuestro, que está en una época de neocapitalismo, las normas de una economía ahondada por problemas de superpoblación y de superproducción industrial o agrícola o de otros órdenes. La situación de países de organización capitalista y superecapitalista no coincide con la nuestra. Sin ser heterodoxo en materia de plataforma partidaria, pretendo tener mi criterio personal acerca de estas cosas. Sostengo siempre la libre concurrencia por sobre las formas de la economía regulada, dirigida o simplemente intervenida.

Sr. Palacio. — Sin embargo, propuso el precio mínimo en un proyecto.

Sr. Pizarro. — El precio mínimo cabe dentro de la economía libre en la tercera faz de la evolución intervencionista...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente y suena la campana de orden.

Sr. Pizarro. — Así lo dice cualquiera de los textos de economía más recientes, de los propios hombres que sostienen el estatismo, como Wageman, en sus ediciones del año pasado. El precio mínimo es una forma intervencionista de defensa de la producción y se concilia con el neoliberalismo económico.

Sr. Méndez Calzada. — Es economía dirigida pura.

Sr. Pizarro. — Economía intervencionista. Es éste un aspecto doctrinario y tendría elementos de sobra para demostrar mi afirmación.

Nosotros llegaríamos a un aumento de superficie cultivada o a un aumento de producción, si se realizara ella en forma intensiva o extensiva. El problema del mercado general interno o externo lleva a sostener este año la necesidad de volver a defenderlo, porque los costos de producción son superiores al precio del producto, como lo dije, y yo motivé la fijación del precio del cereal.

Sr. Palacio. — La oposición a esa defensa ha salido también del sector radical en la sesión de ayer.

Sr. Guillot. — Me parece que el señor diputado está complicando el asunto con incidencias que carecen de importancia. Escuchemos las orientaciones capitales del discurso que se está pronunciando. Después podrá hablar el señor diputado.

Sr. Palacio. — Discúlpeme, no volveré a interrumpir más.

Sr. Pizarro. — Entiendo que la ley tiene aspectos interesantes, aspectos buenos, y entre ellos, por ejemplo, la distribución de los cultivos en la zona dentro de la cual se aplicará. Coincidió en ello, pero no en lo que se refiere a delegar ciertas facultades del Congreso en otros poderes, u otros organismos que dependen de otros poderes, porque se trata de facultades privativas del cuerpo y su delegación constituye una renuncia que afecta el principio de separación de los poderes y que, por consiguiente, viciaría de nulidad a esta legislación que vamos a dictar.

Al respecto no puedo pasar por alto a las expropiaciones que se autorizan por la ley, expropiaciones generis...

—Suena la campanilla que anuncia la expiración del término reglamentario para usar de la palabra.

Sr. Aguirre Cámara. — Hago indicación de que se conceda ampliación de plazo al señor diputado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la indicación.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Puedo continuar el señor diputado.

Sr. Pizarro. — Decía que en materia de expropiaciones el derecho de propiedad cede ante el interés, la necesidad o la utilidad pública; pero ese interés o utilidad lo juzga exclusivamente el Congreso, en cada caso. Y esa facultad del Congreso no puede ser delegada en

forma genérica para que la ejerza otro organismo o poder del Estado. Ni siquiera podría dejarse en manos del Poder Judicial para que él resolviera en qué casos procede o no la expropiación.

La facultad de expropiar conferida por la ley a este organismo en las condiciones señaladas es, señor presidente, una renuncia de facultades y una confusión de poderes en un momento en que hay que defender más que nunca la política del Congreso, errada o no, pero que constituye un criterio político legislativo.

Hay que determinar también el concepto de precio. En materia de expropiación el despacho ha establecido el criterio más absurdo y más difícil para llegar a determinar el precio. Ha podido establecer un criterio netamente fiscal y decir que se expropiará de acuerdo con el precio de la valuación fiscal de los últimos cinco años, pero en ninguna forma tomar un concepto de productividad, que es substancialmente variable y que no se puede determinar en muchos casos sino en un ciclo económico mayor que el fijado en el texto de la ley, o ha podido seguir las normas de la ley vigente.

Los planes agrarios constituyen otro error del despacho. Y ahora voy a razonar por vía inductiva y no por vía deductiva, como alguna vez se me observó al tratar otro despacho de la misma comisión.

El plan agrario, si se hace, debe establecerse con carácter de trienal o quinquenal y ser sometido a la aprobación del Congreso, pero no con prescindencia absoluta de él, porque entonces no sabremos dónde se va a realizar la colonización y lo interesante es que si el Congreso es el que debe promover al bienestar general, a la riqueza, a la inmigración, a la población del país, sea el Congreso el que deba aprobar esos planes y no delegar sus facultades en el Poder Ejecutivo.

Puedo asegurar que las poblaciones del interior de la República no tendrán con esta ley ningún beneficio real ni positivo; y que las zonas o bloques ya colonizados se encuentran perfectamente asegurados sin necesidad de sus disposiciones. Por ello creo que es perfectamente inconducente.

No podría dejar de recordar, para terminar esta exposición, que si el despacho fuera sancionado en las condiciones actuales, no digo una corte celosa como la americana —que al tratar el plan de agricultura de Estados Unidos lo declaró reiteradas veces inconstitucional— sino una corte moderada y tranquila como la nuestra, habría de declarar en más

de una oportunidad la inconstitucionalidad de esta ley.

Por eso, desde un punto de vista estrictamente jurídico estoy en contra de este despacho. No lo estaría para una disposición que dijera: expropiarse por razones de utilidad pública 100.000 hectáreas con exacta determinación de ellos, previo acuerdo legislativo de la provincia, para colonizar o repartirlas entre tantos colonos; este año en la provincia de Buenos Aires, el año que viene en Córdoba o en Entre Ríos o en Santa Fe o en zonas no colonizadas; pero en la forma como ha venido a consideración de la Cámara, estoy en la obligación de votar en sentido contrario al despacho proyectado. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en general.

Sr. Dickmann. — Por la importancia de la votación que va a realizarse sobre este proyecto, pido que ella sea nominal.

Sr. Güiraldes (h.). — ¿Se ha hecho moción de volver este asunto a comisión?

Sr. Presidente (Kaiser). — Después de la votación en general, la Presidencia informará sobre la existencia de esa indicación.

Sr. Eyto. — Es previa la indicación.

Sr. Maino. — Si me permite la Presidencia... En la sesión del 21 del mes pasado anuncié...

Sr. Presidente (Kaiser). — Sí, señor diputado. La Presidencia ya conoce la indicación de que después de votado en general el asunto, se someta a la Cámara su vuelta a comisión; y oportunamente lo hará.

Sr. Maino. — Pero se han suscitado dudas respecto de si es reglamentario proponerlo después de la votación en general. Pero si la Presidencia entiende que la vuelta a comisión es reglamentaria en esas condiciones, no tengo nada que agregar.

Sr. Presidente (Kaiser). — Sí, señor diputado.

Sr. Güiraldes (h.). — La moción de vuelta a comisión debe ser previamente considerada y votada, porque una vez aprobado en general el despacho, no puede volver a comisión.

Sr. Presidente (Kaiser). — Puede volver en cualquier momento, aun después de iniciada su consideración en particular.

Sr. Güiraldes (h.). — ¿Y para qué sirve, entonces, la aprobación en general del despacho?

Sr. Lazo. — Debe votarse el despacho en general, pero si hay una moción previa de vuelta

a comisión, debe ser ésta resuelta con anterioridad.

Sr. Presidente (Kaiser). — No es previa, señor diputado.

Sr. Lazo. — Sí, es previa, señor presidente, porque no se concibe que respecto de un asunto aprobado en general, se pida inmediatamente el pase a comisión. Esa moción puede hacerse cuando se discute el despacho en particular, si algún señor diputado entiende que el asunto no ha sido suficientemente bien despachado.

Sr. Zunino. — Solicito que se lean los artículos 94, inciso 8º, y 95 del reglamento, que tratan la cuestión.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se van a leer.

—Se lee:

Artículo 94, inciso 8º. — Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos: ... 8º: Que el asunto se envíe o vuelva a comisión.

Artículo 95. — Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aun cuando esté en debate, y se tomarán en consideración en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior. Las comprendidas en los seis primeros incisos serán puestas a votación sin discusión; las comprendidas en los cuatro últimos se discutirán brevemente, no pudiendo cada diputado hablar sobre ellas más de una vez, con excepción del autor, que podrá hablar dos veces.

Sr. Presidente (Kaiser). — No tienen ninguna relación con lo que se discute. (*Risas.*)

Sr. Zunino. — La cuestión de que vuelva a comisión es previa a la votación en general.

Sr. Presidente (Kaiser). — La moción tal cual ha sido formulada es la siguiente: para que después de votado en general vuelva a comisión para que ésta tome en cuenta las observaciones que se han hecho durante la discusión.

Sr. Ravignani. — Es exacto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en general.

Sr. Dickmann. — He pedido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Secretaría va a constatar si esa indicación está suficientemente apoyada.

—Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a tomar la votación nominal.

—Practicada la votación:

Sr. Prosecretario (Madero). — Han votado

98 señores diputados, 88 por la afirmativa y 10 por la negativa, en la siguiente forma:

—Por la afirmativa, los señores diputados: Acuña, Aguirre Cámara, Alperín, Anastasi, Araujo, Arbeleteche, Astesiano, Basualdo, Beiró, Boatti, Cafferata, Cantilo, Carús, de las Carreras, Castex, Cisneros, Cooke, Damonte Taborda, De Miguel, Díaz, Diekmann, Eyto, Fassi, Garona, Ghioldi, Gómez Grandoli, Gómez Rincón, Guisolia, Güerci, Guerrero, Guglielmelli, Guilot, Güiraldes (h.), Gutiérrez, Hardoy, Horie, Illanes, Irigoyen, Iriondo, Jiménez, Labeyen, Lazo, López Merino, Medina, Méndez Calzada, Montagna, Moreno, Mugica, Mutiagurria, Noel (M.), Onsari, O'Reilly, Ortiz Basualdo, Osorres Soler, Osorio, Pagano, Palacio, Pandolfo, Pastor, Paz, Peco, Pérez, Piedrabuena, Pinto (h.), Pita, Radío, Ravignani, Repetto, Reyna, Rocha, Saá, Saccone, Sáenz, Sancerini Giménez, Simón Padrós, Solana, Solano Peña, Solari (F. C.), Solari (J. A.), Solís, Susan, Tamborini, Tapia, Teissaire (h.), Vásquez, Vélez, Vilgré La Madrid y Zavala Ortiz.

—Por la negativa, los señores diputados: Aguiar, Beristain, Boero, Busaniche, Hernández (C.), Infante, Maino, Pizarro, Solá y Zunino.

Sr. Presidente (Kaiser). — En consideración la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Maino. — Pido la palabra, para fundarla brevemente.

Las objeciones que se han hecho sobre la textura o economía de la ley son de un carácter tan grave y tan fundamentales que obligan a la reflexión, para que la ley que sancionemos sea lo más cercana posible a la perfección.

Desde distintos sectores y por distintos señores diputados se han hecho objeciones serias, por lo que sería conveniente que la comisión, en el retiro y silencio de su despacho, pueda reflexionar acerca de esas objeciones.

Me parece, pues, de una conveniencia manifiesta que el despacho vuelva a comisión. La Cámara entera desea tener una ley de colonización y es evidente que el Congreso desea, como lo debe desear, que la ley sea lo más perfecta posible.

Las reflexiones que se han hecho acerca de los defectos del despacho, son muy importantes, por lo que insisto en que es necesario que vuelva

a comisión, estableciendo un término a la misma, que podría ser de quince días, para que presente nuevamente el despacho a la Cámara, después de haber estudiado seriamente las objeciones hechas. En esta forma vendría muy mejorado el despacho y se continuaría con la consideración en particular.

Sr. Infante. — Pido la palabra.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Kaiser). — Le corresponde hacer uso de la palabra al señor miembro informante de la comisión.

Sr. Palacio. — Se la cedo al señor diputado por Santa Fe.

Sr. Infante. — Simplemente deseaba pedirle al señor diputado que me acaba de preceder en el uso de la palabra, que difiera su moción para una vez que se haya tratado el artículo 1º, a propósito de cuyo segundo párrafo pensaba hacer una exposición sobre una de las partes esenciales de la ley, que es la que legisla y reglamenta la expropiación. Quizá las indicaciones que yo piense hacer puedan ser recogidas también por la comisión, en el caso de que el señor diputado tuviera la gentileza de aceptar mi indicación, sin perjuicio de repetir la moción.

Sr. Maino. — ¿Por qué el señor diputado no ha hecho las objeciones antes?

Sr. Infante. — Las he hecho; pero como otros señores diputados iban a abundar sobre ellas, no lo hice con toda la extensión y documentación que creo indispensable. Es con motivo de la discusión en particular y a propósito del segundo párrafo del artículo 1º, que creo procede por estar vinculado a los artículos 12 a 15 del proyecto, en que se reglamente este punto especial de la expropiación. Creo que no habría inconveniente en que el señor diputado repita, después, su moción si lo estima pertinente.

Sr. Maino. — No tengo inconveniente en que se trate esa primera parte del artículo 1º y después se vote la moción que yo he formulado.

Sr. Güiraldes (h.). — Puesto en discusión el artículo 1º, la Cámara debe resolver si lo aprueba o lo rechaza. Lamento mucho tener que oponerme al señor diputado, pero la realidad es esta: el momento de votar la moción del señor diputado, no es éste. Las observaciones que haya podido hacer el señor diputado, puede oponerlas al volver a comisión; pero al entrar al debate en particular no podemos sino pronunciarnos sobre el artículo 1º, por la negativa

o la afirmativa. Es preciso votarlo de inmediato.

Sr. Maino. — Mantengo mi moción.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

La comisión no puede aceptar la moción formulada por el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, en la que parece estuviera de acuerdo el señor diputado por Santa Fe.

La Honorable Cámara acaba de votar por una mayoría impresionante el despacho de la Comisión de Legislación Agraria, aprobándolo en general. Este despacho viene con la firma de la totalidad de los miembros de la Comisión de Legislación Agraria, vale decir con el consenso unánime de los diputados que representan a todos los sectores de la Cámara. Ca la uno de sus artículos ha sido materia de un estudio circunstanciado por parte de la comisión, la que por espacio de más de tres meses ha analizado artículo por artículo. El señor ministro de Agricultura concurrió a sus deliberaciones, dando la aquiescencia al despacho y expresando la conformidad expresa por parte del Poder Ejecutivo.

Los señores diputados de todos los sectores que han intervenido en el debate, en su inmensa mayoría han manifestado que votarán este despacho. Casi diría que no se han levantado más que voces aisladas objetándolo en sus bases substanciales y en los principios que sustenta. Las objeciones a que se ha referido el señor diputado por la provincia de Buenos Aires las he contestado en la sesión anterior sintéticamente.

El señor diputado ha planteado que en este despacho se incluyera la limitación en el precio de los arrendamientos agrarios. Ese asunto — y he de repetirlo — ha sido articulado en un proyecto presentado por los propios diputados radicales, que está a estudio de la Comisión de Legislación Agraria y se trata de un problema serio que tendrá que ser resuelto por la comisión después de un estudio concienzudo, porque tiene por objeto remover principios substanciales de la legislación civil que tanto se han sostenido en esta misma Cámara en la sesión de esta tarde por un señor diputado del sector radical.

Por otra parte el señor diputado ha planteado la inclusión en este despacho del impuesto al mayor valor, del impuesto progresivo a la tierra, asuntos que afectan principios de orden constitucional sobre los cuales quién sabe si puede legislar el Congreso. Se trata de establecer gravámenes a tierras ubicadas en las provincias, según la proposición del señor diputado. En el caso de que fueran viables sus manifestaciones, podría articularlas en un proyecto

especial, porque la ley que estamos discutiendo no puede resolver todos los problemas vinculados a la suerte del país ni tiene por objeto resolver la situación de todos los sectores o clases que integran la nacionalidad. Cuando esas son las únicas objeciones que se han formulado, no es posible que un despacho que está en el consenso unánime de la Cámara vuelva a comisión.

Bastan estas breves consideraciones para oponerme terminantemente a que vuelva a comisión para ser revisado, la que nada tendrá que hacer ni rectificar.

Pido que la Honorable Cámara entre a votar en particular, dado que ya ha manifestado su conformidad en general.

Sr. Maino. — Será una ley inoperante; no servirá para los fines que se persiguen.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Como un representante de mi sector ha hecho la moción de que el despacho vuelva a comisión, quiero expresar que me encuentro en absoluta discrepancia con su moción.

Considero que en la votación que ha tenido lugar hace breves momentos, la Cámara se ha pronunciado sobre las objeciones de fondo que se han hecho al despacho, y esas objeciones de fondo han contado con muy pocos votos.

Existiendo ese pronunciamiento categórico, preciso y terminante de la gran mayoría de la Honorable Cámara, ¿qué objeto puede tener la vuelta a comisión? Significaría desautorizar lo que se ha hecho hace un instante.

Yo no quiero decir con esto que el articulado sea perfecto. Para algo está la discusión en particular: para analizar en detalle algunos aspectos que puedan ser mejorados. Pero cuidémonos de aspirar a una ley perfecta: sabemos que esto está fuera de nuestro alcance. Contentémonos con sancionar una buena ley.

Nada más.

Sr. Güiraldes (h.). — Pido la palabra.

Se ha hecho mérito de la abrumadora mayoría que votó afirmativamente hace un instante al producirse la votación en general. Estoy seguro de que si la moción para que el despacho vuelva a comisión hubiese sido previa — y por eso pedí la aclaración —, la votación en general no habría tenido el mismo resultado, porque hemos votado en general entendiendo que venía la proposición subsidiaria y no previa del señor diputado; que aprobábamos el espíritu general de la ley: la necesidad de una ley de colonización, pero no los términos en que está redactada. Y queríamos que volviese a comi-

sión —como vamos a votar— para que se la mejore en forma tranquila, serena y meditada, sin someterla a improvisaciones más o menos impresionistas en la discusión en particular.

No son solamente aspectos generales de la ley lo que se discute. Casi todos los oradores han señalado defectos y han anunciado proposiciones de reforma. Si esas proposiciones encuentran contradicciones, se improvisará un debate y la ley saldrá, con toda seguridad, pésimamente redactada.

Se ha observado en ella, de- de la constitución de un organismo nuevo, frondoso, innecesario, hasta principios de derecho, tan importantes como los que ha señalado el señor diputado Pizarro y que ya había señalado en forma somera el señor diputado Infante.

Creo que no puede hacerse mérito, repite, de la abrumadora mayoría de la votación en general, para presionar nuestro ánimo, a fin de que no se vote favorablemente la moción formulada por el señor diputado Maino.

Por mi parte, le daré mi voto.

Sr. Dickmann. — Pido la palabra.

Hace muchos años que el país reclama una ley de colonización; hace un par de años que la Comisión de Legislación Agraria está estudiando el asunto; el gobierno nacional ha proyectado una ley; en una amplia y profunda discusión los sectores de la Cámara, en su inmensa mayoría, se han manifestado a favor de una ley de colonización, con un acopio de datos y conocimientos que realmente hacen honor a la Honorable Cámara.

Ahora, según la expresión de un señor diputado, vamos a improvisar. Protesto contra ese calificativo.

Declaro que hemos escuchado con real asombro la exposición del señor diputado por Córdoba que traduce una serie de ideas ultramontanas.

El señor diputado Maino ha hecho una exposición, queriendo introducir en la ley el concepto del impuesto progresivo a la tierra y al mayor valor, lo que fué calificado por su colega de sector, que está sentado detrás, como una puerilidad.

Sr. Pizarro. — Está equivocando. Negué que por vía impositiva pueda lograrse la subdivisión de la propiedad. Es un error económico. Sobre el régimen de arrendamientos hay dos proyectos míos.

Sr. Dickmann. — No sé con qué ideas del señor diputado quedarme: si con las anteriores, o las que ha expresado hoy. Las de hoy son ultramontanas.

Sr. Pizarro. — Ultraconstitucionales.

Sr. Dickmann. — No pueden quedar subsistentes una serie de argumentos que aquí se han hecho, que no tienen consistencia de ninguna naturaleza.

Es indispensable que la Cámara perciba que volver a comisión el proyecto, sería matarlo. Si hay alguna discrepancia en particular, la consideraremos; para eso estamos.

Admitiría a título de hipótesis la posibilidad de volver el despacho a comisión si en la discusión en particular aparecieran tantas objeciones y tan enredadas que hiciesen creer a la Cámara que volviéndolo a comisión se solucionarían.

Volverlo a comisión antes de entrar a discutirlo en particular, es un agravio a los distinguidos miembros de la Comisión de Legislación Agraria, que han acreditado capacidad e inteligencia en el estudio de este y de otros proyectos de ley.

Sr. Maino. — No ha habido intención de inferir agravio.

Sr. Dickmann. — No juzgo las intenciones, sino los resultados.

Sr. Maino. — Sería conveniente aceptar lo que propongo para bien del despacho. La ilustración de ocho o diez diputados es inferior a la de los ciento diez que se sientan aquí.

Sr. Dickmann. — No es inferior; es por lo menos igual. Hay que admitir que la Honorable Cámara al constituir las comisiones, designa a los más aptos.

Si el señor diputado, en la discusión en particular propone reformas, tal vez las apoyemos.

Sr. Maino. — Ya están propuestas.

Sr. Dickmann. — ¿Para qué pide, entonces, que vuelva a comisión?

El señor diputado por Buenos Aires se hace vehículo de un propósito ultramontano, y yo no creo que lo desee.

Sr. Pizarro. — Si ultramontano es venir del otro lado de los montes de Córdoba, a los cuales los beneficios de esta ley no van a llegar, estoy de acuerdo en que soy ultramontano. Si ultramontano es oponerse a una ley que está en contra del texto constitucional, también me declaro ultramontano.

Sr. Dickmann. — No es admisible que la Constitución se simbolice y se sintetice en el señor diputado por Córdoba.

Sr. Pizarro. — He citado artículos.

Sr. Dickmann. — Ya veremos en otros terrenos al señor diputado, queriendo violar la Constitución, desde el principio al fin.

Sr. Pizarro. — Le rogaría al señor diputado que me lo indique, para evitar el error llegado el caso.

Sr. Dickmann. — Tratándose de los saldos personales, quiero ver al señor diputado cómo va a defender la Constitución.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia advierte que la moción de aplazamiento debe discutirse brevemente.

Sr. Solá. — Sin embargo, resulta grave el concepto de que la Constitución no sea una ley que deba defenderse.

Sr. Dickmann. — Señor presidente: para caracterizar bien la votación, pido que ella sea nominal.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Llamo la atención de mis distinguidos colegas sobre la circunstancia de que han transcurrido tres meses de este período y que la única discusión fundamental a que hemos entrado es sobre el proyecto de colonización, despachado con la firma de los señores diputados de todos los sectores, que ha motivado largos, y a mi entender, interesantes discursos. No es posible que ahora, a esta altura de la discusión, lleguemos a la consecuencia de que este único esfuerzo que tiende a legislar, ha sido vano y que es necesario volver a comisión el proyecto, después de una larguísima discusión.

Si partiéramos de la base de que la discusión en particular es inoperante, de que no se puede mejorar una ley en la discusión en particular, entonces tendríamos que reconocer razón a los señores diputados que auspician la vuelta a comisión del proyecto. Pero por algo se ha establecido la sana previsión de que la ley se discute en general y en particular; y todas las observaciones formuladas, que se han iniciado con mi discurso y han terminado con el discurso del señor diputado por Córdoba, pueden ser contempladas en la discusión en particular.

No se me escapa que es posible que las modificaciones introducidas en la discusión en particular, puedan originar alguna incongruencia o contradicción, pero es necesario no olvidar que con nuestra aprobación no se convierte el proyecto en ley, pues debe ir al Senado, donde sería posible subsanar cualquiera de los inconvenientes que surgieran de las reformas hechas en la discusión en particular.

Sr. Ravignani. — Debemos cuidar nosotros que las leyes salgan de este recinto lo más perfectas posible.

Sr. Fassi. — Es evidente. El señor diputado no ha interpretado mi pensamiento.

Sr. Ravignani. — No estoy de acuerdo con ese criterio, porque es peligroso.

Sr. Fassi. — No ha interpretado el señor diputado mi pensamiento al suponer que no desearé yo que la ley salga con la mayor perfección posible. A ese respecto debo decir que he redactado con todo cuidado y prolijidad, para guardar la armonía y la concordancia de la ley, las reformas que he de proponer en la discusión en particular. Y quiero decir también que si la ley debe salir perfecta de este recinto, no debe olvidarse la circunstancia de que cualquier error tiene la posibilidad del correctivo antes de la sanción definitiva.

Insisto, pese a mis críticas al despacho, que no es posible que vuelva el proyecto a comisión, a una comisión que lo ha traído con el auspicio de todos sus miembros, que representan a todos los sectores de la Cámara. La comisión tiene formado criterio sobre las cuestiones suscitadas y que han originado los pedidos de reformas. En el recinto debemos nosotros, sin destruir la estructura de la ley, introducir las modificaciones que la pongan en consonancia con el sentir general de la Cámara.

Para que se comprenda que esta tarea no es imposible, voy a tomar la cuestión fundamental mencionada por los señores diputados que han hablado en contra de la ley. Esa cuestión se vincula con las facultades conferidas a la junta agraria nacional para expropiar. Con una reforma que no destruya su estructura general y que estableciera los planes quinquenales propuestos por el señor diputado por Córdoba, si ése fuera el criterio de la mayoría, se habría salvado el escollo principal a que han aludido los señores diputados que solicitan la vuelta a comisión.

Sr. Palacio. — Si me permite el señor diputado, voy a confirmar el argumento que acaba de hacer.

La ley de vialidad y la ley de construcción de elevadores de granos confieren a las entidades encargadas de cumplirlas facultades idénticas a las que da este despacho al consejo agrario nacional. Esas leyes están en vigencia desde hace varios años y a nadie se le ha ocurrido plantear la cuestión de que sean inconstitucionales.

Sr. Fassi. — No quiero que se interpreten de nuevo equivocadamente mis palabras en el sentido de que me hago eco de los argumentos del señor diputado por Córdoba, doctor Pizarro.

Lo único que quiero demostrar es que dentro de esa ley, sin afectarla en su conjunto, sería posible, en la cuestión más trascendente, intro-

ducir la reforma que la hiciera viable, según el criterio de quienes interpretan estrictamente las facultades de expropiación que pueden delegarse al consejo agrario nacional.

Sr. Maino. — Que no es lo más fundamental.

Sr. Fassi. — En otras materias tampoco los argumentos son fundamentales. Comparto todos los puntos de vista del señor diputado Maino. No creo que las cuestiones que él ha planteado sean sin importancia para el futuro de nuestra evolución agraria, pero sostengo que no estamos resolviendo el problema agrario argentino en su integridad y que nunca se ha seguido entre nosotros el sistema de resolver de una vez problemas que necesitan organizarse y estructurarse en leyes independientes.

Sr. Maino. — Pero pudiendo hacerlo ahora, hay que realizarlo.

Sr. Fassi. — Es muy posible que una vez puesto en marcha este organismo podamos continuar la obra de su perfeccionamiento para colocarlo en el terreno a que lo queremos llevar. Si defendiendo con calor la sanción de esta ley, no es simplemente por la erección del organismo que se ha llamado frondoso. Más de una vez, cuando he querido proyectar, me he encontrado con que falta el organismo que pudiera poner en ejercicio mis ideas.

— Ocupa su asiento el señor ministro de Agricultura, ingeniero don José Padilla.

Sr. Fassi. — Alrededor de este organismo pueden surgir iniciativas que lo tengan por gestor, motor, vehículo, y que las ponga en marcha.

No es posible que después de tres meses de discusión y cuando la opinión pública, a través de los diarios más serios, aun cuando a veces han criticado sus detalles, reclama la sanción de esta ley, la Cámara decida que se ha equivocado la unanimidad de su comisión y que se ha perdido el tiempo durante meses para concluir que es necesario que el despacho vuelva a comisión.

Por mi parte votaré por que se continúe con la discusión en particular del despacho, de la que sin duda saldrá muy mejorado y a satisfacción de los señores diputados y de la Honorable Cámara.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Es explicable este debate y estas objeciones en asunto tan complejo como el problema agrario que aborda el despacho sobre colonización.

La comisión no ha improvisado sobre esta materia. Ha estudiado largamente las iniciati-

vas presentadas y el despacho lleva la firma de los representantes de todos los bloques de la Comisión de Legislación Agraria.

Las objeciones que se han hecho aquí son de dos clases: unas de fondo y otras de forma. Las primeras obedecen a un criterio fundamental que discrepa con la opinión vertida por el señor miembro informante y contraría visiblemente la estructura básica del despacho. El voto de la Cámara, favorable en general al despacho, ha confirmado los fundamentos del dictamen de la Comisión de Legislación Agraria. En cuanto a las segundas, la comisión está en condiciones de responder en particular a todas, aceptando las que considere razonables y que mejoren su despacho. No creo que haya ninguna sobre la cual la comisión no puede dar su opinión, porque casi todas, puedo asegurarlo, han merecido ya discusión en el seno de la Comisión de Legislación Agraria. Entre las objeciones formuladas hay algunas que evidentemente no encuadran dentro del problema que ha sido traído aquí; así, por ejemplo, en materia de arrendamientos éstos serán motivo de una ley especial que, como ha dicho el señor miembro informante, está actualmente a estudio de la Comisión de Legislación Agraria. El problema de los impuestos progresivos, de que hablaba el señor diputado por Buenos Aires, autor de la moción de que vuelva a comisión, atacada por el señor diputado por Córdoba, doctor Pizarro, escapa a la competencia de la Comisión de Legislación Agraria. Se trata de un problema fundamental que posiblemente podrá ser considerado por este Parlamento, si es que la Comisión de Presupuesto le dedica el estudio que merece tal iniciativa que, por otra parte, la tenemos reproducida en este momento por varios legisladores y especialmente patrocinada en un proyecto muy interesante de ley de colonización, en Córdoba, iniciativa del actual gobernador doctor Sabattini, proyecto, tal vez de lo más interesante en materia de colonización, entre los hasta hoy propiciados en el país, y que estaría en contra, precisamente, de las manifestaciones del señor diputado por Córdoba.

Sr. Pizarro. — ¿Si me permite?...

El proyecto de ley de Córdoba es substancialmente distinto, en su concepto, del que se pretende sancionar por la Cámara.

Sr. Horne. — Establece el impuesto progresivo.

Sr. Pizarro. — No establece la propiedad privada, sino el sistema de arrendamiento.

Sr. Horne. — Tiene los dos regímenes.

Sr. Pizarro. — Pero prima el otro.

Sr. Horne. — Tiene los dos regímenes. El uno establece ese régimen y el otro el de la propiedad y el impuesto progresivo sobre la tierra.

Entiendo que la comisión está en condiciones de recibir todas las sugerencias que se le hagan, y aceptaremos las que creamos convenientes; pero no es admisible que este proyecto vuelva a comisión porque, vuelvo a repetir, la comisión ha hecho un estudio prolijo de todas las iniciativas. Por otra parte, es una ley reelamada por el progreso del país.

Sr. Hardoy. — Pido la palabra.

El señor diputado por la Capital, a quien respeto extraordinariamente, a pesar de la distancia ideológica que nos separa, acaba de expresar ante la Honorable Cámara su asombro por la proposición formulada de que el asunto vuelva a comisión. Por mi parte, declaro que me sorprende en la misma medida que la comisión, por intermedio de uno de sus miembros más representativos se extraña de manera tan notable hasta provocar la reacción apasionada de que han sido testigos los señores diputados, por la circunstancia de que la Cámara difiera con su criterio. Aquí los asuntos los considera, los juzga y los vota la representación nacional, y es justo que todos los señores diputados tengamos, sin herir con ello susceptibilidades respetables, el derecho de opinar y decidir libremente nuestra actitud en este recito.

Por otra parte, no me alarman los calificativos como algunos de los que acaban de formularse, de reacción y ultramontano, porque discrepamos con el pensamiento socialista. Por mi parte, expreso con toda serenidad, con altura y con conciencia mi opinión, y acepto el juicio que la opinión pública, y no mis adversarios políticos, aplique a mi conducta. En todo caso, declaro con sinceridad, que mucho más que el calificativo de ultramontano me alarmaría el de socialista.

Sr. Ghioldi. — Si aceptara el juicio de la opinión pública, no estaría sentado en esa banca.

Sr. Hardoy. — El señor diputado, como de costumbre, desvía la cuestión. Es un recurso socialista.

Sr. Solá. — Y el señor diputado hace la única cuestión que reglamentariamente no podría hacer, que es poner en duda el título con que los diputados estamos sentados en este recinto.

Sr. Ghioldi. — Desde el primer día lo he puesto en duda.

Sr. Solá. — No tiene derecho para ello, porque una vez sentados en estas bancas, todos somos iguales.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana de orden.

Sr. Hardoy. — Deseo dejar expresa constancia que es la Honorable Cámara, y no el señor diputado, la que tiene autoridad para juzgarnos.

Sr. Ghioldi. — La autoridad me sobra.

Sr. Hardoy. — Es demasiado optimista el señor diputado...

Sr. Ghioldi. — No, señor diputado.

Sr. Hardoy. — Casi diría, jactancioso.

Sr. Ghioldi. — El único que hace el ingenio es el señor diputado en esta Cámara; que pasa de ingenio.

Sr. Hardoy. — Le prevengo al señor diputado...

Sr. Solá. — Eso es casi un acto de incultura.

Sr. Hardoy. — Es un caso de cultura socialista.

—Nuevamente suena la campana de orden.

Sr. Presidente (Kaiser). — El señor diputado por la Capital está perturbando el orden de la Cámara. Le llamo la atención al respecto.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ruggieri. — Pero que no personalicen desde el otro sector, señor presidente. No vamos a tolerar...

Sr. Solá. — Estoy de acuerdo en que no se debe personalizar.

Sr. Hardoy. — Los calificativos han partido, como de costumbre, del sector socialista.

Sr. Ghioldi. — Quiero dar una explicación a la Presidencia, si ella me lo permite.

Aun en el caso de que yo considerara estar en la verdad, yo me plegaría a los dictados de la Presidencia. Quiero, sin embargo, sencillamente, observar a la Presidencia que el ataque no ha partido desde estas bancas.

Sr. Presidente (Kaiser). — Sí, señor diputado.

Sr. Ghioldi. — Lo invito, luego, al señor presidente a revisar la versión taquigráfica.

Sr. Presidente (Kaiser). — La versión taquigráfica le indicará al señor diputado si eso es así.

Sr. Ghioldi. — La leeremos en común y se verá la verdad.

Sr. Presidente (Kaiser). — Ha terminado la incidencia. Continúe con la palabra el señor diputado por la provincia de Buenos Aires.

Sr. Hardoy. — En la breve discusión a que hemos asistido en esta sesión, se han puesto de manifiesto graves dudas sobre la técnica fundamental de la ley. El procedimiento de la expropiación es básico para que se puedan conseguir los propósitos que ella persigue.

Sr. Palacio. — No es exacto.

Sr. Hardoy. — Es lamentable pero ésa es mi opinión.

Sr. Palacio. — Eso no dice el despacho.

Sr. Hardoy. — Esa es mi opinión.

Sr. Palacio. — Pero sería conveniente que el señor diputado tuviese en cuenta lo que dice el despacho.

Sr. Hardoy. — Con ese criterio entiendo que no es posible que un despacho que usa el medio de la expropiación como recurso fundamental para lograr el propósito de la ley, pueda ser sancionado en estas condiciones por la Honorable Cámara.

Por otra parte, en el curso de la discusión se han vertido iniciativas nuevas, interesantes y originales que no pueden ser debidamente meditadas en la discusión en particular. Esta es, como bien acaba de expresarse, de acuerdo al espíritu del Reglamento de la Cámara, únicamente para introducir reformas de detalle, para mejorar la redacción, pero no para modificar lo substancial y fundamental del proyecto de ley que considera la Cámara.

Por otra parte, debo hacer notar a los señores diputados que integran la Comisión de Legislación Agraria, que esta cuestión que acaba de plantearse por el señor diputado Pizarro se refiere a una materia que más bien corresponde ser estudiada por la Comisión de Negocios Constitucionales. No creo que de acuerdo con nuestro reglamento pueda sostenerse honestamente otra doctrina.

La duda principal que se ha suscitado en el debate es una duda de carácter constitucional. En consecuencia, es a la Comisión de Negocios Constitucionales a la que corresponde escuchar en esta emergencia.

No creo tampoco que la circunstancia de que algún otro organismo creado por ley haya sido dotado de facultades para hacer expropiaciones similares a las que podrá hacer el consejo nacional agrario proyectado, sea suficiente para sostener que esa cuestión constitucional y judicial no se producirá más adelante con motivo de la aplicación de esta ley.

Cabe observar que con esta ley se herirán otros intereses, se afectará de otra manera la propiedad privada, y en consecuencia es perfectamente lógico suponer que también las

reacciones serán diferentes y las consecuencias no serán iguales. Yo, por mi parte, creo que la aplicación del método de expropiación que establece esta ley provocará necesariamente, en la primera oportunidad, un pronunciamiento de la justicia, que si es contrario a la economía constitucional de la ley, dará por tierra con los sanos y nobles propósitos que la inspiran.

Sr. Anastasi. — Han variado los pronunciamientos de la justicia en ese sentido.

Sr. Fassi. — Aun suponiendo que se declarara inconstitucional la facultad de expropiación, tienen muchos millares de hectáreas los bancos y las instituciones oficiales dependientes del Estado para comenzar sus tareas y mientras tanto el Congreso arbitraría otros procedimientos para ello. Como ve el señor diputado, no hay ninguna razón para hacer una cuestión fundamental ni una cuestión de inconstitucionalidad.

Sr. Hardoy. — Me parece grave que el Congreso sancione leyes inconstitucionales en esta materia.

Sr. Anastasi. — ¿Dónde está la inconstitucionalidad?

Sr. Hardoy. — Acaba de ser expresado en todo lo que se refiere al procedimiento de las expropiaciones por el señor diputado Infante.

Sr. Anastasi. — Lo examinaremos en particular y le demostraremos al señor diputado que no es así.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se está discutiendo la conveniencia o no de volver el despacho a comisión.

Sr. Hardoy. — Me resultará muy interesante escuchar la opinión del señor diputado por la Capital, que es profesor universitario; pero declaro que me será más útil conocer la opinión de la comisión creada específicamente por el reglamento de la Cámara, que es la de Negocios Constitucionales.

Por otra parte, la afirmación de que en todo caso esa legislación podría ser modificada por otra posterior y más perfecta, tampoco me convence. Creo que no hay nada más eterno que lo provisorio. Una larga práctica así lo demuestra. En consecuencia, ya que nos hemos avocado al estudio de esta ley y la estamos discutiendo, demoremos un poco más su sanción para que en este período, si no llegamos a tener una ley perfecta, por lo menos la tengamos mejor que la que proyecta el despacho de la comisión.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

No he hecho una simple observación constitucional en lo que se refiere al régimen de la expropiación. He formulado varias observaciones de

carácter constitucional. He dicho que era una ley de carácter nacional y que el Congreso no tiene facultad para colonizar en todo el territorio de la República. Por el artículo 67, inciso 16 de la Constitución, el Estado nacional sólo puede colonizar las tierras de la Nación y territorios nacionales.

Sr. Anastasi. — Todas las tierras de propiedad nacional. La ley le da el instrumento al consejo de colonización para que cualquier tierra se convierta en tierra de propiedad nacional.

Sr. Pizarro. — El artículo 107 de la Constitución dice que la colonización en los territorios de las provincias es facultad exclusiva de los gobiernos provinciales. No son facultades delegadas. El organismo a que ha aludido el señor diputado tampoco se puede crear con esas facultades, pues la forma de federalizar territorios provinciales es por acuerdo de las respectivas legislaturas. Ello tiene que ser una ley contrato y sobre el particular hay, no obstante la errónea jurisprudencia de la Corte, distintas iniciativas formuladas en este recinto.

Cuando las observaciones a la ley son de detalle y pueden ser subsanadas en el curso de la discusión, estoy de acuerdo con la tesis del señor diputado, de que se puedan tratar en el recinto; pero cuando son genéricas, cuando se refieren al contexto de la ley; cuando no es una sino diez observaciones fundamentales relativas al régimen de la propiedad, en lo que se relaciona con la facultad de creación del consejo, con la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar y remover empleados, con el régimen de los campesinos, con los beneficios de las zonas que pueden afectar y con la forma de financiar la misma ley, todo ello no puede ser solucionado en una discusión en particular. El señor diputado Fassi me va a dar la razón. Cuando se trató la ley de gendarmería sostuvo la tesis contraria.

Sr. Fassi. — Al contrario.

Sr. Pizarro. — No, señor diputado; cuando le observé que había que modificar el despacho era porque se trataba de observaciones de detalle, que podían subsanarse en el recinto; pero no cuando son observaciones de fondo al texto mismo de la ley que requieren una revisión por la comisión.

Estoy de acuerdo en principio en que se dicte la ley de colonización; pero no lo estoy con el sistema proyectado y por ello adhiero a la moción del señor diputado por Buenos Aires de que pase a comisión.

Nada más.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Como miembro de la Comisión de Legislación Agraria que ha puesto su firma al pie del despacho, me considero obligado a decir algunas palabras para defender la parte de labor y de responsabilidad que me corresponde en el mismo.

Ya en el discurso que pronuncié cuando se discutió en general el despacho, manifesté que él no me satisfacía totalmente, pero consideraba que era un arbitrio que podría ser útil y prestar grandes beneficios, sobre todo si la aplicación de esta ley se ponía en manos de hombres entendidos en estas cuestiones y animados de un propósito sano de progreso general. Comprendo que es ésta una de las leyes más difíciles que puede abordar un Parlamento, porque está destinada a favorecer a una clase social que parece no tener conciencia del problema. Es una ley que nadie ha pedido; la gente del campo, nuestros agricultores y los que no tienen tierra para trabajar, los parias del interior, no tienen conciencia del problema y no nos han dicho, ni como diputados ni como cuerpo, que necesitan la sanción de una ley semejante. Si, en cambio, hubiera un movimiento de conciencia y de fuerza, eso habría bastado para que esta Cámara comprendiera en su urgencia el problema y se decidiera a resolverlo. Pero el campo nada ha pedido y sigue trabajando y sufriendo en silencio, y nosotros estamos aquí buscando el medio de interpretar con acierto los intereses y el bienestar de la clase campesina.

El ambiente favorable que de dos o tres años a esta parte encuentra esta ley, no está determinado por la interpretación de las necesidades de la clase rural. El ambiente favorable ha nacido, señores diputados, en la esperanza de muchos propietarios acibillados de deudas hipotecarias y de compromisos, que ven en ella la posibilidad de una liquidación conveniente. Eso es lo que ha creado el ambiente favorable a esta ley y él ha surgido principalmente en la clase terrateniente.

Me llama la atención que el capítulo relacionado con la expropiación sea el que ha despertado tanta inquietud y el que constituye el blanco del fuego recio que a este proyecto se le hace. Estoy asombrado. Esta ley, señores diputados, no dispone casi de fondos, pues no es una ley expropiadora. De manera que no entiendo esa inquietud que ha nacido en algunos señores diputados. No es una ley expropiadora, es una ley licitadora. El consejo agrario nacional apelará para la adquisición de las tierras desti-

nadas a colonizar al método de la licitación. Y tanto es una ley licitadora, que hace pocos días hemos tenido oportunidad de leer una nota de la Sociedad Rural Argentina —que es en nuestro país la más alta expresión del latifundio— en la que se hacen objeciones al sistema de la licitación y al de expropiación, basado en la productividad demostrada del suelo y no en la tasación para la contribución directa. La Sociedad Rural, que entiende de expropiaciones y de problemas rurales y agrarios, la considera una ley simplemente licitadora y manifiesta su oposición a ella, justamente por esa circunstancia.

Creo, señores diputados, que por todo lo que aquí se ha dicho y se ha visto y por el sentido y el alcance que debe atribuirse a algunas votaciones, esta ley no cuenta en esta Cámara, en estos momentos, con el ambiente propicio para una diligente discusión en particular y su ulterior sanción. Pero si esto no ocurriera, no creo que todo el esfuerzo de la Cámara resultara completamente estéril. Desde luego, tenemos ya la opinión comprometida del Poder Ejecutivo. El presidente Justo, por su ministro Cárcano, y el presidente Ortiz, por su ministro Padilla, han prestado a esta ley una colaboración minuciosa y sincera, que no sólo prueba la versación de los ministros, en esta materia, sino también su decidido auspicio y adhesión.

La ley ha quedado también auspiciada por el voto general que ha dado esta Cámara y ese voto servirá, por lo menos, para despertar en el campo argentino la conciencia que necesita para reclamarnos una justicia que nosotros hoy queremos discernirle gratuitamente.

Nada más. ¡Muy bien! ¡Muy bien!

Sr. López Merino. — Pido la palabra.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. López Merino. — Dentro de pocos minutos hará dos horas que estamos debatiendo si entraremos a la discusión en particular, pues, no otra cosa significa discutir si el despacho vuelve a comisión.

Como ya han expresado su opinión no siempre concordante, los representantes de todos los sectores de la Cámara, y cada uno de nosotros tiene hecha su composición de lugar, formulo moción de orden de que se cierre el debate y se vote la indicación de vuelta a comisión.

Sr. Repetto. — Que la votación sea nominal.

Sr. Guillot. — Yo creo que el señor diputado tendrá la deferencia de aplazar su moción en

vista de que un colega y compañero de sector ha pedido la palabra.

Sr. López Merino. — La aplazo hasta que hable el señor diputado.

Sr. Labayen. — Yo la reproduzco, porque no queda nada que decir.

Sr. Guillot. — El señor diputado no sabe si queda algo que decir. Yo solicité la palabra al tiempo que lo hacía el autor de la moción. Es de buena cortesía parlamentaria que cuando ocurre tal coincidencia se aplaze una moción de esa naturaleza, que de otra manera parecería tener carácter de mordaza individual.

Sr. Labayen. — No he querido ser descortés con el señor diputado; pero dados los términos en que plantea la cuestión, no me queda sino retirar la moción.

Sr. Guillot. — No voy a abusar de la cortesía del señor diputado ni de la Cámara.

He votado favorablemente en general el despacho. Y como me veo inclinado a votar por la vuelta a comisión y se ha hecho indicación de que la votación sea nominal, debo dar una explicación de mi actitud, siquiera sea para desvirtuar aquello de que existe contradicción entre votar en general una ley y estar después por su retorno a comisión.

He votado en general porque coincide con el designio de la ley, con el pensamiento que conduce en general su texto; pero eso no me compromete a aceptar en todas sus partes el articulado, mucho más cuando, como en el caso, se le han formulado tantas objeciones. Entonces me parece prudente no improvisar, no en cuanto a las ideas, sino en cuanto a las fórmulas que traduzcan el pensamiento nuevo que ha de introducirse en muchos capítulos del despacho y a tal efecto considero juicioso pasarla a comisión, en donde el trabajo se puede hacer con mayor reposo y método.

A las numerosas objeciones formuladas al despacho debo agregar la que insinué con anterioridad: me refiero a su aspecto financiero. Si nuestro propósito fuera obstaculizar el debate, hubiéramos reclamado a su tiempo el giro del despacho a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de cuyo resorte es el capítulo XVII del mismo, pero no lo hicimos en el deseo de que la ley siguiera su curso libre de obstáculos.

Pero no es dudoso que no ha sido refutada la afirmación de que el régimen financiero de esta ley es endeble e insuficiente. No hemos escuchado una sola palabra ni del miembro informante ni de ninguno de los otros señores diputados acerca de por qué han escogido esta

financiación, qué seguridades tienen de que estos \$ 30.000.000 m/n. van a bastar para poner en movimiento los propósitos de la ley.

Sr. Palacio. — La manifestación del señor ministro de Hacienda.

Sr. Guillot. — Que la ha hecho en el seno de la comisión y que nosotros hubiéramos deseado que el señor diputado la repitiera en el recinto.

Otra cosa: ¿por qué se ha escogido esta cifra de \$ 30.000.000 m/n. y no la de \$ 20.000.000 moneda nacional, que figuraba en otros proyectos; sobre qué índices reales del costo de la colonización se han fundado las cifras; qué desarrollo piensan dar los señores diputados a su plan, que justifique la inversión de pesos 30.000.000 m/n. de inmediato y \$ 10.000.000 moneda nacional anuales; y hasta qué punto podrá realizarse el pensamiento de la ley, de acuerdo con esta financiación? Esperamos todavía la respuesta.

Y esta no es una objeción arbitraria, si se recuerda que en la provincia de Buenos Aires —citada hace poco—, con motivo de una ley más o menos semejante, se han invertido de \$ 15.000.000 m/n. a \$ 20.000.000 m/n. en un plan de colonización que ha transformado en propietarios a 300 ó 400 arrendatarios. Con \$ 30.000.000 m/n., ¿cuántos arrendatarios se harán dueños de la tierra en el país?

Por otra parte, una ley votada por el Congreso no puede desvincularse del estado general de la Nación. Una ley por la que se van a invertir fondos que no son tan cuantiosos, efectivamente, pero que significan una movilización considerable de dinero, no puede dejar de tener en cuenta la situación financiera en un momento determinado. Y la actual situación financiera del país, que no quiero sombrear, pero que es conocida de todos los señores diputados, acaso torne inoperantes las disposiciones de esta ley. Acaso haga inútiles sus previsiones financieras.

Además —y voy abreviando—, en este despacho se ha prescindido de algo que se relaciona con la misma financiación. No he encontrado disposición que se refiriera a una limitación del valor de las propiedades futuras, cosa que tiene mucha importancia si se atiende, repito, al caso de la provincia de Buenos Aires, donde se llegó, creo, al límite de \$ 60.000 moneda nacional por chacra. De acuerdo con el valor que se fije a la unidad futura que ha de entregarse a los arrendatarios que soliciten convertirse en propietarios, podrá esta-

blecerse si los fondos a que se refiere el capítulo XVII darán a esta ley la eficacia operante que de ella esperan sus autores y que se anuncia en el artículo 1º de su texto.

No deseo ser un personaje desagradable. Sé la laboriosidad con que la comisión ha estudiado este despacho; conozco el patriótico fervor con que lo ha sostenido el señor ministro de Agricultura, en quien me complace en reconocer un funcionario que desempeña su alto cargo con un gran concepto de amor al país; pero, asimismo, señor presidente, cuando vemos que las observaciones son tantas y tan serias, cuando sabemos que acaso se disenta artículo por artículo, y que quizá sea necesario improvisar en el recinto redacciones nuevas que pueden crear incongruencias y contradicciones en el articulado de este largo texto, entonces pedimos prudentemente que el despacho vuelva a comisión.

Y ahora sí protesto contra la afirmación hecha de que volver el despacho a comisión es darle un entierro más o menos pomposo. En esta misma Cámara hay ejemplos recientes que demuestran lo contrario. Me refiero a la ley de empleados bancarios. La comisión presidida por nuestro erudito compañero de sector, doctor Anastasi, proyectó un despacho. Entró al recinto, fué discutido, se hizo farragosa la discusión, y volvió a comisión, donde se lo transformó, adaptándolo al concepto de la mayoría de la Cámara. Se consideró nuevamente en el recinto y hoy es una ley. No se le enterró. Se le mejoró mediante un procedimiento reglamentario.

Con este concepto, señor presidente, voy a votar la moción del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Labayen. — Reproduzco la moción de cerrar el debate.

Sr. Presidente (Kaiser). — Como ningún señor diputado ha pedido la palabra, se votará la moción de que vuelva el despacho a comisión.

Sr. Dickmann. — Se ha pedido votación nominal.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar si pasa a comisión.

La moción de cerrar el debate es innecesario votarla, porque no hay oradores anotados.

Sr. López Merino. — Se ha hecho innecesario ahora.

Sr. Prosecretario (Madero). — Han votado 88 señores diputados, 66 por la negativa y 22 por la afirmativa, en la siguiente forma:

—Por la negativa, los señores diputados: Acuña, Aguirre Cámara, Alsina, Allperín, Anastasi, Araujo, Astesiano, Beiró, Beristain, Boatti, Busaniche, Carrs, de las Carreras, Cisneros, Cooke, Damonte Taborda, Dickmann, Fassi, Fazio Rojas, Garona, Ghioldi, Gutiérrez, Horne, Infante, Irgoyen, Iriondo, Jiménez, Labayen, Lazo, López, López Merino, Medina, Méndez Calçada, Montagna, Moreno, Mugica, Noel (M.), Ortiz Basualdo, Osoreo Soler, Osorio, Palacio, Pandolfo, Pastor, Paz, Peco, Pena, Pérez, Piedrabuena, Pinto (h.), Pita, Radio, Ravignani, Repetto, Rocha, Ruggieri, Saá, Sacccone, Siri, Solari (F. C.), Solari (J. A.), Solís, Susan, Tamborini, Tapia, Tolsaire (h.) y Zavaia Ortiz.

—Por la afirmativa, los señores diputados: Aguiar, Basualdo, Boero, Cantilo, Castex, Eyto, Godoy, Guglielmelli, Guillot, Güiraldes (h.), Hardoy, Hernández (C.), Illanes, Maino, Ortiz Basualdo, Pizarro, Peña (Solano), Sáenz, Schoo Lastra, Solá, Solana, y Vilgré La Madrid.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda rechazada. En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Infante. — Pido la palabra.

El alcance del párrafo segundo del artículo 1º del proyecto en discusión, que dice: «La propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo» queda precisado en la frase final del inciso e) del artículo 7º que enumera entre las atribuciones del consejo agrario nacional, la de: «Adquirir directamente inmuebles en cualquier punto del país o proponer al Poder Ejecutivo su expropiación»; en la del inciso e) del artículo 8º, que al determinar los inmuebles que se utilizarán para los fines de la ley, enumera, entre otras tierras: «Las que el consejo adquiera directamente por compra o sean expropiadas de acuerdo con la presente ley»; y en los artículos 12, 13, 14 y 15 que forman el capítulo IV, que trata de la «Expropiación de inmuebles para la colonización» y por esa razón deben ser consideradas estas disposiciones simultáneamente, pues la aprobación de

dicho párrafo importaría la aceptación, por lo menos en principio, de sus correlativos.

El Código Civil tiene un título que versa sobre las restricciones y límites del dominio; pero las disposiciones relativas a la expropiación por causa de utilidad pública no se encuentran en ese título, sino en el que se refiere especialmente al dominio. Las restricciones y límites de la propiedad que establece el código, constituyen, por decirlo así, el régimen normal de la propiedad inmueble y se fundan en el interés público o en el interés recíproco de los fundos vecinos. Las primeras pueden tener un carácter puramente administrativo, y entonces están regidas por el derecho administrativo o pueden referirse a la libre disposición jurídica de la propiedad o a la obligación de dejar una calle o camino público.

La expropiación es más que una limitación o restricción del dominio. Es una verdadera institución autónoma a la que, sin embargo, se agregan consideraciones de otro orden, porque, si bien es de derecho público, tiene un aspecto patrimonial privado. Es por esta causa que se ocupan de ella el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho civil.

Conviene señalar que en el proyecto del Poder Ejecutivo no se habla ni de expropiación, ni de restricciones, ni limitaciones a la propiedad de la tierra. Tampoco el proyecto de los señores diputados Cafferata y Courel, contiene ninguna disposición sobre el particular. Igual silencio guardan el proyecto de los señores diputados Pinto y Arbeletche sobre creación del consejo nacional de colonización y el proyecto del señor diputado Eyto, todos ellos impresos como anexos en el orden del día que se considera.

En el proyecto de despacho del señor diputado Horne, está el antecedente del párrafo 2º del artículo 1º del despacho. Sus términos son estos: «La propiedad de la tierra queda afectada al progreso social, sujeta, por tal motivo, a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley». Los artículos 3º, 4º y 5º de este proyecto de despacho, redactado por el señor diputado por Entre Ríos, contienen las otras disposiciones relativas a la expropiación, que concuerdan con los incisos d), e) y f) del artículo 5º del proyecto del señor diputado Palacio, sobre creación de la dirección nacional de colonización, siendo estos últimos transcritos casi literalmente en los artículos 12, 13 y 14 del despacho.

El artículo 12 del despacho establece que en el caso de que el consejo agrario nacional

no pudiera adquirir tierras en las condiciones especificadas para entregarlas a la colonización, queda facultado para realizar la expropiación, con la aprobación del Poder Ejecutivo, de la que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley, y agrega que con este objeto se declara de utilidad pública la tierra que el consejo agrario nacional, con la aprobación del Poder Ejecutivo, juzgue preciso incluir en los planes colonizadores. El artículo siguiente excluye de la expropiación las extensiones de tierra inferiores a 1.000 hectáreas y las que fueren objeto de una explotación agraria racional verificada directamente por su propietario. Primó la iniciativa del señor diputado por Córdoba.

El señor diputado por Entre Ríos extendía la expropiación, también, a las tierras comprendidas en los ejidos y excluía sólo a las que dentro de ellos fueran de una superficie inferior a 100 hectáreas, a las que, fuera de los mismos, tuvieran menos de 500 hectáreas y a las que fueran una explotación modelo y trabajadas directamente por sus propietarios. Son palabras textuales del anteproyecto del despacho. Extendía, también, la expropiación a los terrenos o propiedades de las ciudades que fuesen necesarias, que se destinarían a la construcción de casas para obreros o para instalar mercados, puestos de venta, exposiciones u otros servicios.

La primera pregunta que surge al espíritu es la de si el estado actual de la tierra en nuestro país requiere una medida de esta naturaleza, y la segunda, si los preceptos constitucionales la admiten.

En cuanto a la primera y en lo que respecta a la provincia de Santa Fe, creo que puede asegurarse que no es necesaria; más, se me ocurre que dentro de nuestro sistema federal sería prudente dejar a sus autoridades provinciales que juzgaran de la conveniencia y procedencia de tal medida. En cuanto a la segunda, repito lo que manifesté al ser discutido el proyecto en general: que las disposiciones de los artículos 12 y 13, que ya he precisado, lo mismo que la del artículo 14, que fija normas rígidas para la indemnización son, en mi sentir, violatorias de la Constitución.

El artículo 17 de la Constitución nacional consagra el principio de que la propiedad es inviolable y establece que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, agrega, debe ser calificada por ley y previamente in-

demnizada. El Código Civil, en su artículo 2.511, repite el mismo concepto, en su primer párrafo. Hay en él un error de imprenta, que el doctor Bibiloni hace notar en su anteproyecto de Código Civil y que la comisión redactora del proyecto ha salvado en el artículo que lleva el número 1.474. Es evidente que la desposesión no ha de ser la previa, porque debe serlo siempre la indemnización.

Los antecedentes de la expropiación por causa de utilidad pública se remontan a la mayor antigüedad. Es verdad que se discute si existió en Roma, pues Suetonio refiere el caso de no haber podido Augusto concluir una plaza porque un patricio tenía aprecio particular a un pedazo de tierra heredado de sus mayores, indispensable para completar la obra, o según otros, que renunció a engrandecer el foro por no causar extorsión a los propietarios de fincas inmediatas.

El Código Teodosiano estableció la enajenación de fincas de la Iglesia cuando el interés público lo reclamara. Las leyes de Partidas consignaron en dos de sus disposiciones el principio de la expropiación forzosa. Leyes posteriores le repitieron, dejando siempre al Estado la facultad de fijar el precio, como lo habían hecho las leyes romanas. Por lo visto, ahora se quiere rectificar este progreso: y se vuelve a fijar el precio por el Estado de lo que se expropia. Recién Carlos IV es el primero que ordena la apreciación pericial como una garantía más al derecho de propiedad. El año 1836 se dictó la primera ley especial sobre esta materia, durante la regencia de María Cristina, motivada por el desarrollo que empezaron a adquirir las obras públicas. El cambio radical fué operado como consecuencia de la Constitución del año 1869, cuyo artículo 14 establecía que nadie puede ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad pública y en virtud de mandamiento judicial, agregando como ineludible garantía la previa indemnización regulada por el juez con intervención del interesado.

A estos antecedentes españoles hay que agregar el del artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre votada por la Asamblea Constituyente del 20 al 26 de agosto de 1789, que declaraba la propiedad privada «inviolable y sagrada», autorizando la expropiación sólo por causa de «necesidad pública». Pronto se vió que esta condición era excesiva y que el interés privado debe ceder frecuentemente ante el interés público. Por esta causa, a pesar de que el Código de Napoleón, de 1804, reproduce casi

literalmente en su artículo 545 la disposición de la declaración de los derechos del hombre, no habla más que de «utilidad pública», cambiando profundamente el concepto al substituir la palabra «necesidad» por la palabra «utilidad».

La enmienda 5ª de la Constitución norteamericana no es propiamente un antecedente del artículo 17 de nuestra Constitución. Sobre este artículo hemos seguido la tradición latina, lo mismo que en materia procesal y en general a todo lo que se refiere a la ley común. Así como en la forma política respondemos a la tradición anglosajona. La Constitución norteamericana se refiere sólo a la acción del poder público, sancionando la inviolabilidad general de la propiedad privada, que no podrá ser tomada para uso público sin justa compensación. El antecedente inmediato del artículo de nuestra Constitución en nuestra misma patria, está en las constituciones de los años 1819 y 1826.

El artículo 123 de la primera de ellas, que recordarán los señores diputados, fué designada con el nombre de Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica, dice: «Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, los miembros del Estado no pueden ser privados de ella, ni gravados en sus facultades sin el consentimiento del cuerpo legislativo o por un juicio conforme a las leyes»; y el artículo 124 establece que: «Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún pueblo o individuo particular sea destinada a los usos públicos, el propietario recibirá por ella una justa compensación». Según se ve, el primero de los artículos exige el consentimiento del cuerpo legislativo o un juicio conforme a las leyes, y el segundo establece que la propiedad sea destinada a «los usos públicos» y que el propietario reciba una justa compensación.

En el artículo 175 de la Constitución de 1826, se reproduce al pie de la letra el 123 de la Constitución de 1819, hasta la palabra «facultades», agregándose como final «sino en los casos establecidos por la ley». La modificación es digna de ser especialmente remarcada, pues en virtud de la supresión de las frases que quedan indicadas y su substitución por ésta, se había eliminado la disyuntiva entre el pronunciamiento del cuerpo legislativo y el juicio conforme a las leyes, y al reproducirse en el 176 los términos del 124 hasta las palabras «usos públicos» y substituirse las finales por estas: «bajo las formalidades de la ley, el propietario recibirá por ella una justa compensación», quedaba exclusivamente reservado a la

ley la declaración que sólo podría hacerse cuando el interés del Estado lo exigiera y para ser destinada a usos públicos.

Para que la expropiación proceda, es indispensable en primer término una causa de utilidad pública, vale decir, que no puede tener lugar para fines de interés privado: no se puede quitar la propiedad a una persona para dársela a otra en su beneficio o interés personal, sea ésta el Estado, sea una institución cualquiera, sea una empresa o un individuo. Esta es la primera limitación constitucional establecida a la facultad de expropiar: tiene que haber un objeto público y ser destinada la propiedad a un fin de progreso, de bienestar de la comunidad.

La tradición en Norteamérica ha hecho que pueda afirmarse que no es lícito expropiar a uno para entregar la propiedad a otro. En nuestra misma historia nacional se han señalado casos en los cuales se ha vulnerado esta limitación, que ha sido sintetizada diciendo que no sería legítimo tomar la propiedad de A para entregarla a B.

No es posible establecer un principio o regla general para definir el concepto de utilidad pública, que puede tener aplicaciones innumerales según las circunstancias y hasta la época, pues puede ser de orden material, económico, higiénico, estético o de fomento del bienestar social.

Interesa aclarar aquí que si bien la facultad de calificar la utilidad pública corresponde al Poder Legislativo, esto no quiere decir que esa declaración no pueda ser revisada por el poder judicial en caso de abuso extremo. Así lo declaró la Corte Suprema al resolver el caso motivado por la ley de expropiación para la apertura de la avenida de Mayo. En el considerando 5º del fallo la Corte dice que «la atribución deferida al Congreso no puede entenderse ilimitada ni con un alcance tal que lo autorice a disponer arbitrariamente de la propiedad de una persona para darla a otra». Ratifico, aun si cabe, este concepto negándole la facultad de incorporarla al dominio público, aunque fuese abonando el justo valor que pudiera tener la propiedad y aun cuando la obra fuese útil y conveniente a los intereses sociales, si pudiera ejecutarse aquélla o fuera dado atender a éstos sin recurrir a la expropiación, o por otros medios que ésta. Vale decir, entonces, que en el concepto de la Corte Suprema la expropiación es una especie de último medio por el cual se puede llegar a obtener esta finalidad. Siempre que

haya otro medio deberá ser preferido al de la expropiación.

Si bien el artículo 17 de la Constitución nacional deja librado al arbitrio del Congreso la calificación de la utilidad pública, y el artículo 67, inciso 16, enumera, entre otras atribuciones del Congreso, la de proveer lo conducente a la prosperidad del país y al adelanto y al bienestar general, el artículo 28 prescribe que los derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Nadie pone en duda que la facultad de expropiar sea esencialmente política y exclusiva del Poder Legislativo. La discreción legislativa no reconoce límites; pero los tribunales de justicia serían llamados a intervenir cuando el Congreso, salvando los extremos legales, decretase la expropiación de lo que es de Juan para dárselo a Pedro, palpablemente y sin relación a uso público alguno o no acordase indemnización de ningún género. Esto, que parece haber motivado algún pequeño gesto de disconformidad, lo dijo el señor procurador de la Corte, don Eduardo Costa, en su vista en el caso a que me refiero.

El caso judicial que la aplicación de los artículos del proyecto provocaría seguramente —no soy yo solo ya quien lo ha dicho— no ha sido resuelto en nuestros tribunales, por una razón muy sencilla: porque nunca se ha dictado en nuestro país una ley semejante; pero un análisis somero de las sentencias fundamentales sobre expropiación —y digo somero porque no quiero cansar a los señores diputados que me hacen el honor de escucharme—, una revista

de los fallos de primera y segunda instancia y de las vistas de los fiscales y del procurador general de la Nación, bastará para que llegáramos al convencimiento pleno de la resolución sería contraria a la constitucionalidad de la ley.

En 18 de junio de 1867...

—Suena la campanilla que indica la expiración del término reglamentario para usar de la palabra.

Sr. Pita. — Solicito que se acuerde una prórroga al orador.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Cámara resolverá.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Infante. — Mientras se consigue número podría proseguir mi exposición.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia no lo ha consentido en otras oportunidades y no podría hacerlo ahora.

—Se continúa llamando.

—Después de algunos instantes:

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia hace presente que en la casa no se encuentran más señores diputados que los que están en el recinto.

No pudiendo votarse la prórroga solicitada por el señor diputado, queda levantada la sesión.

—Era la hora 18 y 20.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RAVIGNANI

Buenos Aires, 2 de agosto de 1939.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Presente.

En nombre de la Comisión del Círculo Militar que presido, tengo el honor de dirigirme al señor presidente y por su alto intermedio a la Honorable Cámara, para poner en su conocimiento que esta institución, que agrupa en su seno a la casi totalidad de los señores jefes y oficiales del ejército, en actividad y retiro, ha visto con profunda simpatía el interesante proyecto presentado por el distinguido señor diputado nacional doctor don Emilio Ravignani en el sentido de que se cumpla la ley

de erección de un monumento a la memoria del general Juan Gregorio de Las Heras.

Con ese motivo e interpretando los sentimientos de sus asociados, el Círculo Militar que presido apoya calurosamente el proyecto de referencia, por estimar de verdadera justicia que uno de los más ilustres soldados de relevante actuación en las campañas de la Independencia americana, tenga en la Capital de la República, en bronce o en mármol, el monumento que lo recuerde a la presente y futura generaciones argentinas.

Saludo al distinguido señor presidente con mi más alta consideración y respeto.

Hay una firma.
Mayor-Secretario.

Basilio B. Pertiné,
General de división.
Presidente.